

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada Ponente

APELACIÓN AUTO	
EJECUTANTES	ROMELIA DE JESÚS LONDOÑO MONSALVE
EJECUTADO	ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA
RADICADO	05308-31-03-001-2022-00197-01
TEMA	Medida cautelar innominada en proceso ordinario laboral
DECISIÓN	Confirma.

*Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ROMELIA DE JESÚS LONDOÑO MONSALVE** contra la señora **ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA**.

La Magistrada Sustanciadora, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el ACTA No 005, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## I.- ANTECEDENTES

La señora ROMELIA DE JESÚS LONDOÑO MONSALVE, actuando a través de su apoderada judicial demandó a la señora ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA, solicitando la declaratoria de una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido cuyos extremos temporales estuvieron comprendidos entre el 28 de noviembre de 1992 y el 18 de agosto de 2022; en consecuencia, se CONDENE a la demandada al reconocimiento y pago de: cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicio, salarios, indemnización moratoria del art. 65 del CST, indemnización por despido injusto del art. 64 del CST, aportes pensionales adeudados previo cálculo actuarial que realice COLPENSIONES, la indexación de todos los dineros adeudados incluido el cálculo actuarial, todo lo que ultra petita y extra petita se logre demostrar en el proceso, y las costas.

Y en escrito separado solicitó la siguiente MEDIDA CAUTELAR (fls. 14 del archivo PDF 01):

**MARGARITA MARIA VASQUEZ PREDIGA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.558.616 de Yarumal y portadora de la Tarjeta Profesional Número 316.282 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada de la señora **ROMELIA DE JESUS LONDOÑO MONSALVE**, , por medio del presente escrito solicito la medida cautelar de **INSCRIPCIÓN DE DEMANDA**, sobre los siguientes bienes:

1. Inmueble identificado con la matricula inmobiliaria nro. 012--- 012-16909 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Girardota Antioquia, de propiedad de la demandada **ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA C.C. No 21.365.575.**

Solicito se oficie a la O.R.I.P. de GIRARDOTA ANTIOQUIA, para que se sirva realizar la presente inscripción.

Mediante auto interlocutorio del 21 de septiembre de 2022 (fls. 1 al 3 del archivo PDF N° 04), el JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOTA – ANT, decidió ADMITIR la presente demanda ordinaria laboral, y vincular de manera oficiosa en calidad de litis consorte necesario por pasiva a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, sin pronunciarse sobre la medida cautelar deprecada.

La apoderada judicial de la demandante, a través de memorial de fecha 22 de septiembre de 2022, insistió en la medida cautelar de inscripción de la demanda en la oficina de instrumentos públicos del Municipio de Girardota – Ant., sobre un bien inmueble propiedad de la demandada (fls. 1 al 4 del archivo PDF N° 05).

## **II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:**

Mediante auto del 19 de octubre de 2022 (archivo PDF N° 06), el JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOTA – ANT, decidió NO ACCEDER a la medida cautelar solicitada, al estimar que la referida solicitud no se ajusta a los presupuestos del art. 85 A del CPTSS, teniendo en cuenta que no se logran evidenciar los actos realizados por la demandada tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, razón por la cual consideró el despacho que la misma era IMPROCEDENTE.

## **III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN**

Esta decisión fue recurrida en reposición y subsidio apelación por la apoderada judicial de la demandante ROMELIA DE JESUS LONDOÑO MONSALVE, argumentando que la finalidad de la medida cautelar deprecada es hacer efectivas las eventuales obligaciones que se impongan a la demandada.

Expone también la recurrente que sin desconocer lo reglado en el art. 85 A del CPTSS, no se puede perder de vista que la inscripción de la demanda como medida cautelar en los procesos declarativos tiene como finalidad dar publicidad

frente a terceros ajenos al proceso, la existencia del mismo, sin que con dicha medida se ponga los bienes fuera del comercio, es decir que el titular del bien sobre el cual recae la medida puede realizar actividades comerciales.

Señaló que al interponerse una demanda contra una persona en la que se persigue el pago de una deuda, junto con la demanda se puede solicitar la inscripción de la demanda respecto a los bienes sujetos a registro, con el fin de que el demandado tenga mayor dificultad para insolventarse.

Lo anterior, aunado a que la demandante es una mujer que cuenta con más de sesenta años de edad, circunstancia que la margina del mercado laboral, y como la demandada no le ha cotizado al sistema general de pensiones, se corre el riesgo que traspase el único bien que tiene para no cumplir con todas las obligaciones laborales a favor de la demandante.

Y finalmente expone en su recurso, que otra causal para decretar la medida cautelar es la favorabilidad de la medida, pues la actora ha trabajado al servicio de la señora ALICIA BOTERO, por más de 25 años, sin que esta le haya pagado siquiera el salario mínimo, unas vacaciones, prima de servicios o aportes a seguridad social y la única forma de recuperar lo que ha dejado de percibir es asegurando con la inscripción de la demanda el único bien de propiedad de la demandada.

La juez *A Quo* mediante auto del 30 de noviembre de 2022 (archivo PDF 08), decidió no reponer lo resuelto, manifestando que en esta temprana etapa procesal no es posible establecer la existencia o vulneración de un derecho, toda vez que la esencia del proceso ordinario laboral es evaluar las pruebas incorporadas al proceso por las partes y decidir si hay lugar o no a declarar la vulneración del derecho reclamado, situación que a la fecha no ha ocurrido, y sumado a ello no existe prueba sumaria de que la demandada se encuentre efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la

sentencia, que dé lugar a un convencimiento de la necesidad de proteger las presuntas resultas del proceso.

### **Alegatos de conclusión**

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, procede la Sala a resolver previas las siguientes,

## **IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:**

La controversia jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a la apelación presentada a instancias de la demandante ROMELIA DE JESÚS LONDOÑO MONSALVE, sobre el auto interlocutorio a través del cual se negó la MEDIDA CAUTELAR deprecada.

El cual como bien se sabe es un auto susceptible del recurso de apelación, conforme lo señalado en el numeral 7° del art. 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quedando así habilitada la competencia en segunda instancia.

Como quiera que en la presente actuación procesal no se aprecia vicio alguno que genere nulidad de la misma, se procede a resolver los aspectos objeto del recurso, en la medida que ellos satisfacen la exigencia legal para un pronunciamiento de fondo en esta instancia.

### **Medidas cautelares**

Con relación al tema propuesto, debe recordarse que las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un

derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.

Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que eventualmente se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte Constitucional ha afirmado que aunque el legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.

En materia laboral y seguridad social, la medida cautelar tiene expresa consagración legal, en el art. 85 A del CPTSS, y se limita únicamente a una caución que debe prestar el empleador para garantizar el cumplimiento de la sentencia, y que puede oscilar entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar; sin embargo, ésta solo procede cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúa actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Ahora, el Código General del Proceso introdujo en materia procesal la figura de la medida cautelar innominada, cuyo fin es la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurarla efectividad de la pretensión, ampliado el espectro a varias figuras diferentes a la simple caución, **como la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro**, y el posterior embargo o secuestro de bienes en caso de resultar favorable la sentencia de primer grado, facultando al juez para decretarlas según su prudente juicio, a fin de evitar que las condenas impuestas en la sentencia resulten ilusorias.

Estas medidas cautelares innominadas pueden solicitarse al momento de presentación de la demanda, para que el juez a su prudente arbitrio las decrete, teniendo en cuenta la legitimación de las partes, el interés para actuar, la necesidad en cuanto a su adopción, su proporcionalidad, alcance y duración.

Advierte la Sala que si bien la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia no avalaba la aplicación analógica del Código General del Proceso, por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, frente al tema de las medidas cautelares innominadas, dicha postura fue superada (**AL2008-2021**) y se armonizó salvo algunas excepciones (acción extraordinaria de revisión ) a lo expuesto por la Corte Constitucional a partir de la sentencia **C-043 de 2021** donde se estudió una acción pública de inconstitucionalidad frente al artículo 37A de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, decidió declarar EXEQUIBLE de forma condicionada la referida normativa, en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del Código General del Proceso, abriendo así la puerta a todas aquellas medidas que el juez encuentre razonables para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la

misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

Visto lo anterior, y solo en el hipotético caso que la inscripción de la demanda ordinaria laboral, se entendiere como una especie de medida cautelar innominada, no puede perderse de vista el presupuesto legal establecido en el art. 85 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues tanto la caución allí contemplada, como la medida cautelar innominada que ahora es factible en materia laboral y seguridad social, requieren de la demostración de los actos realizados por la demandada ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, lo que no ocurrió en este caso.

Corolario de lo anterior, y al no haberse acreditado el presupuesto legal para ello, esta Sala no accederá a decretar la medida cautelar innominada con fundamento en el literal c) del numeral 1° del art. 590 del Código General del Proceso, esto es, de decretar la inscripción de la presente demanda ordinaria laboral en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Girardota – Ant., en relación al bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria nro. 012---012-16909 propiedad de la señora ALICIA BOTERO DE PIEDRAHITA.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se confirmará que se revisa en apelación de fecha y origen conocidos, pero por las razones aquí expuestas.

Sin COSTAS en ésta instancia.

## **V. D E C I S I Ó N**

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,



## RESUELVE:

**Primero. CONFIRMAR** la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**Segundo. SIN COSTAS** en esta instancia.

Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

### Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 023 del 13 de febrero de 2023.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.